Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, de fecha trece de noviembre de dos mil veinticuatro.

**VISTO** el expediente electrónico conformado con motivo de los Recursos de Revisión **06546/INFOEM/IP/RR/2024 y 06547/INFOEM/IP/RR/2024**, interpuesto por **XXXXX XXXXXXX,** en lo sucesivo Recurrente o Particular, en contra de la respuesta del Sujeto Obligado, **Organismo Agua y Saneamiento de Toluca,** a las solicitudes de acceso a la información pública00139/OASTOL/IP/2024 y 00140/OASTOL/IP/2024, se emite la presente Resolución, con base en los Antecedentes y Considerandos que se exponen a continuación:

**A N T E C E D E N T E S**

**I. Presentación de las solicitudes de información**

Con fecha once de septiembre de dos mil veinticuatro, el Particular presentó dos solicitudes de acceso a la información pública, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), ante el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca, en los siguientes términos:

***00139/OASTOL/IP/2024***

***“DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA.***

*SOLICITO TODOS LOS OFICIOS FIRMADOS DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL AÑO 2024” (Sic)*

***“MODALIDAD DE ENTREGA***

*A través del SAIMEX”*

***00140/OASTOL/IP/2024***

***“DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA.***

*SOLICITO TODOS LOS OFICIOS FIRMADOS DE LA DIRECTORA JURIDICA Y DE FISCALIZACION DE LOS AÑOS 2022, 2023 Y 2024” (Sic)*

***“MODALIDAD DE ENTREGA***

*A través del SAIMEX”*

**II. Prórroga para atender la solicitud de información.**

Con fecha cuatro de octubre de dos mil veinticuatro, el Sujeto Obligado, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), notificó las Resoluciones del Comité de Transparencia con números RES/04/OAYST/CT/SE/11a/2024 y RES/05/OAYST/CT/SE/11a/2024, mediante las cuales aprobó la ampliación de término para atender la solicitud de información.

**III. Respuesta del Sujeto Obligado.**

Con fecha quince de octubre de dos mil veinticuatro, elSujeto Obligado dio respuesta a las solicitudes de acceso a la información a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), a través del Titular de la Unidad de Transparencia, en los que medularmente manifestó:

|  |  |
| --- | --- |
| **FOLIO DE SOLICITUD** | **RESPUESTA** |
| **00139/OASTOL/IP/2024** | Oficio número 200C13000/679/2024, del quince de octubre de dos mil veintidós, suscrito por el Director de Administración y Finanzas, y dirigido al Jefe de Departamento de Transparencia y Oficialía de Partes, en los siguientes términos:  *“…*  *Y en alcance al Oficio: 200C13000/618/2024 del 27 de septiembre del año en curso; sobre el particular, con fundamento en el artículo 122, 132, 135, 165, 166 y 174 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de México y Municipios; debido al volumen de la información peticionada con un total de 659 oficios (1607 fojas), se informa que se requiere el pago de las cuotas de los derechos aplicables conforme al artículo 73 del Código Financiero del Estado de México y Municipios.*  *…”* |
| **00140/OASTOL/IP/2024** | Oficio número 200C12000/942/2024 del veintiséis de septiembre de dos mil veinticuatro, suscrito por la Directora Jurídica y de Fiscalización, y dirigido al Jefe del Departamento de Transparencia y Oficialía de Partes, en los siguientes términos:  *“…*  *Al respecto, se le informa en primera instancia que, la suscrita tomó posesión del cargo como Titular de esta Dirección Jurídica y de Fiscalización, en fecha veintiocho (28) de junio del año dos mil veintitrés (2023), motivo por el cual, la información y/o documentación que se adjuntan al presente serán a partir de dicha fecha.*  *Ahora bien, y en segunda instancia, se anexan en formato digital (PDF)* ***los oficios firmados*** *correspondientes a los ejercicios fiscales dos mil veintitrés (2023) y dos mil veinticuatro (2024).*  *…”*  ii) Oficio número 200C16001/074/2024 del quince de octubre de dos mil veinticuatro, suscrito por el Jefe del Departamento de Transparencia y Oficialía de Partes y dirigido al Solicitante por medio del cual informó remitir el diverso 200C12000/942/2024 y la Resolución RES/05/OAYST/CT/SO/3a/2024.  iii) Resolución del Comité de Transparencia número RES/05/OAYST/SO/3a/2024 del catorce de octubre de dos mil veinticuatro por medio del cual se aprobó la clasificación parcial de los oficios firmados por la Directora Jurídica y de Fiscalización en los años 2023 y 2024 por contener datos personales referentes a domicilio de particulares, nombre y teléfono de particulares, Clave Única de Registro de Población (CURP), correo electrónico y Número de Identificación del Suministro (NIS). |

**III. Interposición del Recurso de Revisión.**

Con fecha veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro, se recibió en este Instituto, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), dos Recursos de Revisión interpuestos por la parte Recurrente, en contra de la respuesta por el Sujeto Obligado, en los siguientes términos:

***00139/OASTOL/IP/2024***

***“ACTO IMPUGNADO***

*LA DECLARACION DE CLASISIFCACION DE INFORMACION” (Sic.)*

***“RAZONES O MOTIVOS DE LA INCONFORMIDAD***

*LA SUPLENTE DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO CUENTA CON LEGITIMIDAD PARA FIRMAR UN ACTA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA, YA QUE LA FIRGURA DE SECRETARIA PARTICULAR NO FORMA PARTE DEL ORGANIGRAMA DEL ORGANISMO AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA, POR LO QUE SE ENCUENTRA USURPANDO FUNCIONES.” (Sic.)*

***00140/OASTOL/IP/2024***

***“ACTO IMPUGNADO***

*LA NO ENTREGA DE LA INFORMACION SOLICITADA” (Sic.)*

***“RAZONES O MOTIVOS DE LA INCONFORMIDAD***

*NO ENTREGAN LA INFORMACION SOLICITADA” (Sic.)*

**VI. Trámite del Recurso de Revisión ante este Instituto**

**a) Turno de los Medios de Impugnación.** El veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro, el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), asignó el número de expediente **06546/INFOEM/IP/RR/2024** y **06547/INFOEM/IP/RR/2024,** a los Medios de Impugnación que nos ocupan, con base en el sistema aprobado por el Pleno de este Órgano Garante y los turnó a los Comisionados Luis Gustavo Parra Noriega y Sharon Cristina Morales Martínez, para los efectos del artículo 185, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**b) Admisión de los Recursos de Revisión.** El veintidós y veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro, se acordó la admisión del Recurso de Revisión interpuesto por el Recurrente en contra del Sujeto Obligado, en términos del artículo 185, fracciones I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el cual fue notificado a las partes el veintidós y veinticinco de dicho mes y año, respectivamente, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), en el que se les otorgó un plazo de siete días hábiles posteriores a la misma, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera y formularan alegatos.

**c) Acumulación de los Medios de Impugnación.** El treinta de octubre de dos mil veinticuatro, el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, en atención al Acuerdo emitido por Pleno de este Instituto, del treinta de octubre de dos mil veinticuatro, acordó la acumulación de los Recursos de Revisión 06547/INFOEM/IP/RR/2024 al diverso 06546/INFOEM/IP/RR/2024, por ser este último el más antiguo, sustanciado bajo el índice de esta Ponencia, al advertir conexidad entre estos, ya que fueron promovidos por la misma persona, en los que señaló como Sujeto Obligado, al Organismo Agua y Saneamiento de Toluca.

**d) Informe Justificado o manifestaciones.** Las partes fueron omisas en emitir manifestaciones o alegatos.

**e) Cierre de instrucción.** El siete de noviembre de dos mil veinticuatro, al no existir diligencias pendientes por desahogar, se emitió el acuerdo por medio del cual se declaró cerrada la instrucción y se determinó pasar los expedientes a resolución, en términos de lo dispuesto en los artículos 185, fracciones VI y VIII, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, acto que fue notificado a las partes el mismo día, mediante el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), el mismo día.

En razón de que fue debidamente sustanciado e integrado el expediente electrónico y no existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la resolución que conforme a Derecho proceda, de acuerdo a los siguientes:

**C O N S I D E R A N D O S**

**PRIMERO**. **Competencia**

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5°, párrafos trigésimo segundo, trigésimo tercero y trigésimo cuarto, fracciones I, II, III, IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1°, 8°, 9°, 10, 56 y 42, fracciones I, II y III, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1°, 2°, fracciones II y IV; 13, 29, 36, fracciones I y II; 176, 178, 179, 181 párrafo tercero, 185, 188 y 189 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 7°, 9°, fracciones I y XXIII y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**SEGUNDO**. **Causales de improcedencia y sobreseimiento**

De las constancias que forma parte del Recurso de Revisión que se analiza, se advierte que previo al estudio del fondo de la *litis*, es necesario estudiar las causales de improcedencia y sobreseimiento que se adviertan, para determinar lo que en Derecho proceda.

**Causales de improcedencia**

Este Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente (acorde con el Criterio orientador en la Tesis de Jurisprudencia “IMPROCEDENCIA.” (Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, 1985, pág. 262), el cual establece que debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, sea que las partes lo soliciten o no, por ser una cuestión de orden público; de tal suerte, deberá ser desechado cualquier Recurso de Revisión que actualice alguno de los supuestos establecidos en el artículo 191 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, por ser improcedente.

Para el caso, del Recurso de Revisión 06546/INFOEM/IP/RR/2024, **no se actualiza ninguna de las causales de improcedencia** del artículo previamente referido; además, que se actualiza la causal de procedencia señalada en el artículo 179, fracción V, de la Ley en cita, pues la parte Recurrente se inconformó de la entrega de información incompleta.

No obstante, respecto al Medio de Impugnación 06547/INFOEM/IP/RR/2024, **no se actualizan las causales de improcedencia** establecidas en el artículo 191, fracciones I, II, de la IV a la VII, toda vez que: este Instituto no tiene conocimiento de que se haya presentado el Recurso de manera extemporánea; se encuentre en trámite algún medio de defensa presentado por el Recurrente ante otra instancia; no existió prevención alguna; la veracidad de la respuesta no formó parte del agravio; ni se realizó una consulta o trámite mediante el pedimento de información, o bien, que el Solicitante haya ampliado la solicitud.

Asimismo, se considera por lo que hace a la fracción III, del artículo 191, de la Ley de la materia, toda vez, que ya ha sido admitido el Recurso de Revisión, se realizará el análisis correspondiente en el Considerando Tercero.

**Causales de sobreseimiento**

Por ser de previo y especial pronunciamiento, este Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento.

El artículo 192 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, señala las causales por las cuales se puede sobreseer en todo o en parte, el Recurso de Revisión; así, del análisis realizado por este Instituto, se advierte **que no se actualizan los supuestos de sobreseimiento previstos en las fracciones I, II, III y V**, toda vez que no hay constancias en el expediente en que se actúa, de que la Recurrente se haya desistido, haya fallecido, haya modificado o revocada su respuesta o bien, que el Recurso de Revisión haya queda sin materia.

No obstante, por lo que hace a la hipótesis prevista en la **fracción IV**, a saber que, una vez admitido el Recurso de Revisión 06547/INFOEM/IP/RR/2024, aparezca alguna causal de improcedencia en términos de la presente Ley, resulta necesario analizar el artículo 191, fracciones III, de dicho ordenamiento jurídico, que establece que el Recurso de Revisión será desechado por improcedente, cuando dicho medio no actualice alguno de los supuestos previstos en el diverso 179 de la presente Ley. En ese orden de ideas, dicho artículo prevé lo siguiente:

***“Artículo 179.*** *El recurso de revisión es un medio de protección que la Ley otorga a los particulares, para hacer valer su derecho de acceso a la información pública, y procederá en contra de las siguientes causas:*

*I. La negativa a la información solicitada;*

*II. La clasificación de la información;*

*III. La declaración de inexistencia de la información;*

*IV. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;*

*V. La entrega de información incompleta;*

*VI. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;*

*VII. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información;*

*VIII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado;*

*IX. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible y/o no accesible para el solicitante;*

*X. Los costos o tiempos de entrega de la información;*

*XI. La falta de trámite a una solicitud;*

*XII. La negativa a permitir la consulta directa de la información;*

*XIII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la respuesta; y*

*XIV. La orientación a un trámite específico.*

*…”*

En ese contexto, el artículo 176 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, establece que el Recurso de Revisión, es la garantía secundaria mediante la cual se pretende reparar cualquier afectación al derecho de acceso a la información pública.

Además, conforme al Diccionario de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la página oficial de este Instituto (<https://www.infoem.org.mx/es/content/informacion-publica#queEsRRdeIP>), el Recurso de Revisión constituye un medio reconocido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, a través del cual los Solicitantes pueden manifestar su inconformidad ante la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado a una solicitud de información pública.

Así, se logra vislumbrar que el Recurso de Revisión es una garantía secundaría al Derecho de Acceso a la Información Pública, por lo que, es procedente cuando los Particulares se inconformen con la falta de respuesta o trámite, o bien, de alguna circunstancia de la contestación realizada por los Sujetos Obligados **a una solicitud de información específica.**

Con base en lo anterior, y a efecto de verificar si el presente Recurso de Revisión actualiza alguna causal de procedencia del artículo 179 de la Ley de la Materia citado en párrafos que anteceden, es necesario realizar un cuadro que contenga lo solicitado, la respuesta emitida por el Sujeto Obligado y la inconformidad por parte de la Persona Recurrente, como se muestra a continuación:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Solicitud** | **Respuesta** | **Inconformidad** |
| Los oficios firmados del Director de Administración y Finanzas del primero de enero al once de septiembre de dos mil veinticuatro. | A través del Director de Administración y Finanzas, precisó que debido al volumen de la información con un total de 659 oficios (1607 fojas), se requería el pago de las cuotas establecidas en el Código Financiero del Estado de México y Municipios. | ***“ACTO IMPUGNADO***  *LA DECLARACION DE CLASISIFCACION DE INFORMACION” (Sic.)*  ***“RAZONES O MOTIVOS DE LA INCONFORMIDAD***  *LA SUPLENTE DEL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS NO CUENTA CON LEGITIMIDAD PARA FIRMAR UN ACTA DEL COMITE DE TRANSPARENCIA, YA QUE LA FIRGURA DE SECRETARIA PARTICULAR NO FORMA PARTE DEL ORGANIGRAMA DEL ORGANISMO AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA, POR LO QUE SE ENCUENTRA USURPANDO FUNCIONES.” (Sic.)* |

Conforme a lo anterior, se logra vislumbrar que el Sujeto Obligado, precisó que los oficios firmados del Director de Administración y Finanzas, constaba en un total de 659 (seiscientos cincuenta y nueve) oficios con 1607 (mil seiscientas siete) fojas, motivo por el cual requirió el cobro de la información.

Ahora bien, de las constancias que obran en el expediente electrónico del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), el Particular se agravió de la clasificación de información, toda vez que el suplente de la Dirección de Administración y Finanzas no contaba con legitimidad para firmar un Acta del Comité de Transparencia, pues la figura de Secretaria Particular no formaba parte del Organigrama del Sujeto Obligado; de tal circunstancia se logra vislumbrar que la inconformidad de la persona Recurrente, radica en la falta de atribuciones por parte del Servidor Público para firmar un Acta del Comité de Transparencia en la que se clasifique la información.

Así, se advierte que los agravios del Recurrente no actualizan ninguna causal de procedencia, por las siguientes consideraciones:

* No se inconformó de la negativa de información, la falta de respuesta o trámite, cambio de modalidad, entrega de un documento inaccesible o incomprensible **o bien de los costos**, pues se inconformó de una clasificación que no fue referida por el Sujeto Obligado; y
* No se agravió de la inexistencia o incompetencia, ni de la entrega de información incompleta o que no corresponde con lo solicitado.

Lo anterior, resulta así, pues la inconformidad de la Particular en un agravio a otra solicitud de información, pues el Sujeto Obligado nunca se pronunció sobre la clasificación de información, ni remitió ningún Acuerdo del Comité de Transparencia firmado por el suplente del Director de Administración y Finanzas, al no ser parte de la información peticionada; por lo que, en el presente caso, la Particular no emitió ninguna inconformidad con la respuesta entregada.

Así, se logra vislumbrar que, la inconformidad referida por el Particular no actualiza alguna causal de procedencia, pues como ya se refirió, no existe inconformidad con la respuesta entregada, y, por lo tanto, se materializa la causal de desechamiento establecida en el artículo 191, fracción III, de la Ley de la materia; sin embargo, toda vez que fue necesario admitir el Medio de Impugnación, para verificar dicha circunstancia, lo procedente es **SOBRESEER** el mismo.

**TERCERO. Determinación de la Controversia**

Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el Particular requirió, en atención a la solicitud de información 00140/OASTOL/IP/2024, todos los oficios formados por la Directora Jurídica y de Fiscalización del primero de enero de dos mil veintidós al once de septiembre de dos mil veinticuatro.

En respuesta, el Sujeto Obligado a través de la Directora Jurídica y de Fiscalización , precisó que tomó posesión en fecha veintiocho de junio de dos mil veintitrés motivo por el cual remitía información únicamente de dos mil veintitrés y dos mil veinticuatro; ante dicha respuesta por parte del Ente Recurrido, el Particular, se inconformó con la entrega de información incompleta, al señalar la no entrega de la información solicitada, lo cual se actualizan el supuesto previstos en el artículo 179, fracción V, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dicha situación, al aplicar la suplencia de la queja a favor de la Solicitante, en términos de los diversos 13 y, penúltimo párrafo, del 181 del ordenamiento señalado, relacionados con el último párrafo, del 146 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Así las cosas, una vez admitido y notificado el Recurso de Revisión a las partes, estas fueron omisas en emitir manifestaciones o alegatos.

Lo anterior, se desprende de las documentales que obran en los expedientes de referencia, materia de la presente resolución, consistente en: la solicitud de acceso a la información; la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado y el escrito recursal; instrumentales que se toman en cuenta a efecto de resolver el presente medio de impugnación, conforme a lo dispuesto por el artículo 185, fracción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**CUARTO. Marco normativo aplicable en materia de transparencia y acceso a la información pública**

El artículo 6°, Apartado A), fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público.

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone en su artículo 70, la información que se considera corresponde a las Obligaciones de Transparencia, la cual debe estar disponible para cualquier persona de manera permanente y actualizada.

En materia local, el artículo 5°, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, es coincidente con la Constitución Federal, en el sentido de la publicidad de toda la información, con la única restricción de proteger el interés público, así como la información referente a la intimidad de la vida privada y la imagen de las personas, con las excepciones que establezca la ley reglamentaria.

Por su parte, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (Reglamentaria del artículo 5° de la Constitución Local), establece lo siguiente:

El artículo 12, que, quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma.

El artículo 18, que, los Sujetos Obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, considerando desde su origen la eventual publicidad y reutilización de la información que generen.

El artículo 19, que, se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados y en caso de que dichas facultades no se hayan ejercido, se deberá motivar la respuesta en función de las causas que motivaron tal circunstancia.

**Quinto. Estudio de Fondo**

Una vez establecido lo anterior, se procede analizar el agravio hecho valer por el ahora Recurrente, referente a la entrega de información incompleta; para lo cual en principio es necesario contextualizar la solicitud de información, referente a los oficios.

Sobre el tema, cabe precisar que de conformidad con los artículos 6°, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 4° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 4° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, **toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona.**

Ahora bien, el artículo 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, contempla que los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.

Lo anterior toma relevancia, pues según Jarquín, Soledad (2019), en el “Diccionario de Transparencia y Acceso a la Información Pública” (p. 126 y 127), todos los sujetos obligados tienen la obligación jurídica, en materia de transparencia y acceso a la información pública, de dejar constancia o registro material de las actividades efectuadas con motivo del ejercicio de sus atribuciones de cualquier acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones.

Además, precisa que los documentos son el registro material que da testimonio de las actividades efectuadas por los sujetos obligados con motivo del ejercicio de sus facultades, atribuciones o funciones, los cuales pueden ser escritos, impresos, sonoros, visuales, electrónicos, informáticos, entre otros; asimismo aclara que estos pueden contener valores administrativos, legales, fiscales, contables, históricos, informativos, entre otros.

En ese orden de ideas, el artículo 46 del Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado por Servicio de Carácter Municipal Denominado Agua y Saneamiento de Toluca 2022-2024, precisa que la Dirección Jurídica y de Fiscalización está adscrita a la Dirección General y es la encarada de fungir como representante legal y asesor general para la defensa de los intereses del Organismo, así como la autoridad fiscal para la determinación de créditos fiscales y verificación administrativa de los usuarios del sistema comercial del Organismo.

Conforme a lo anterior, se logra vislumbrar que la pretensión del Recurrente, es obtener todos los oficios firmados por la Directora Jurídica y de Fiscalización del primero de enero de dos mil veintidós al once de septiembre de dos mil veinticuatro.

Establecida dicha circunstancia, de las constancias que obran en el expediente en el que se actúa, se logra advertir que el Ente Recurrido turno la solicitud de información a la **Dirección de Administración y Finanzas**, razón por la cual, es necesario hacer referencia al procedimiento de búsqueda que debió seguir los Sujetos Obligados para localizar la información, el cual se encuentra previsto en los artículos 160 y 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, mismo que es el siguiente:

1. Las Unidades de Transparencia garantizarán que las solicitudes de acceso a la información se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla -de acuerdo a las facultades, competencias y funciones-, con el objeto de que dichas áreas realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información requerida, y
2. Los sujetos obligados otorgaran acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, en el formato en que el solicitante manifieste, de entre aquellos formatos existentes.

Así, este Instituto considera que el Sujeto Obligado cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en el artículo 162 de la Ley de la materia, pues turno la solicitud de información a la Dirección de Administración y Finanzas, unidad administrativa de la que se solicitó la información.

Ahora bien, en respuesta la Directora Jurídica y de Fiscalización, precisó en su respuesta que tomó el cargo como titular de la Dirección Jurídica y de Fiscalización el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, motivo por el cual remitía la información a partir de dicha fecha al once de septiembre de dos mil veinticuatro.

Al respecto, es señalar que este Instituto, no tiene atribuciones para pronunciarse sobre la veracidad de la información. Apoya lo anterior, el Criterio de Interpretación, de la Primera Época, con número de registro SO/031/2010, emitido por el Pleno del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.

Conforme a lo anterior, cabe precisar que si bien la pretensión del Particular era obtener los oficios firmados por la Directora Jurídica y de Fiscalización desde el primero de enero de dos mil veintidós; lo cierto es que indicó las circunstancias por las cuales no podía entregarse la información desde dicha fecha, lo cual radica en el hecho de que había causado alta en fecha posterior.

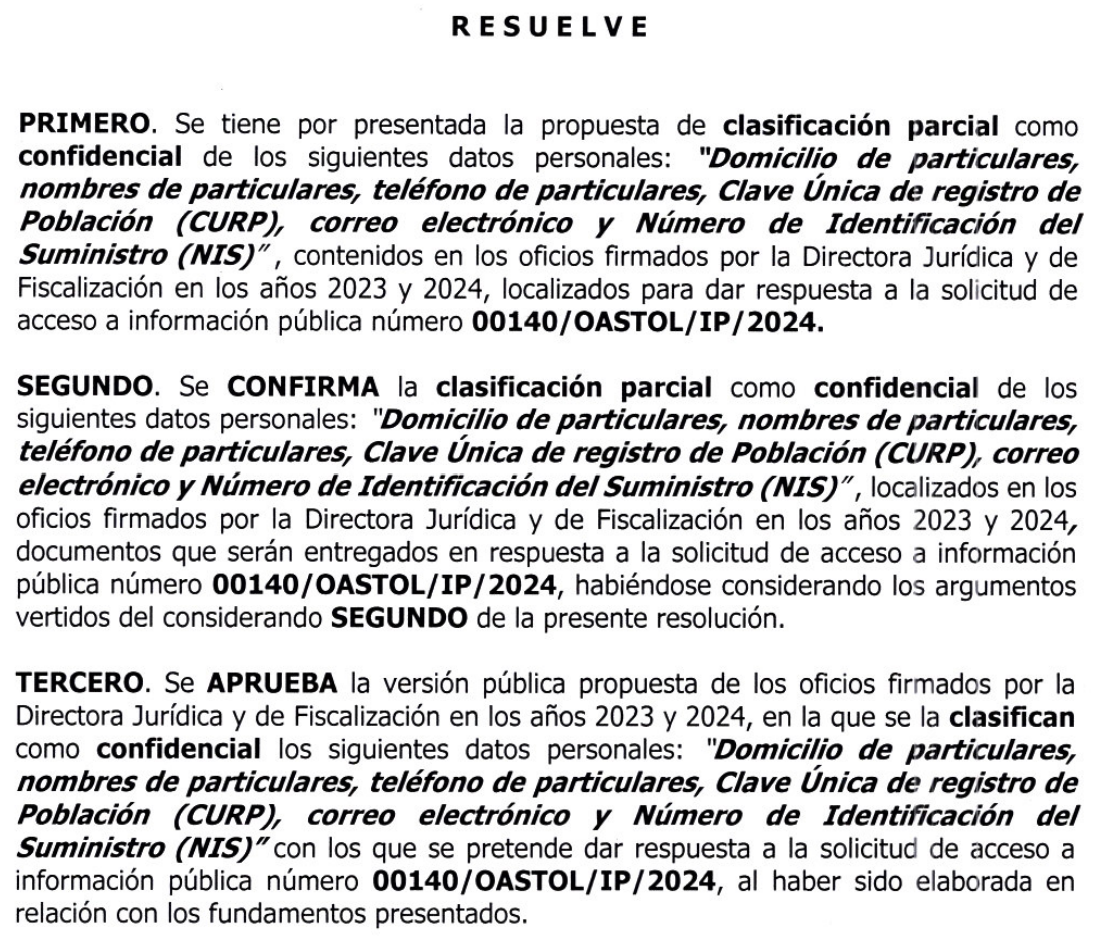
Así, este Instituto considera que la servidora pública señaló las razones por las cuales no contaba con la información del primero de enero de dos mil veintidós al veintisiete de junio de dos mil veintitrés, a saber, porque no ocupaba el puesto en dicho periodo al causar alta el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, por lo que, cumplió con lo establecido en el artículo 19, párrafo segundo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

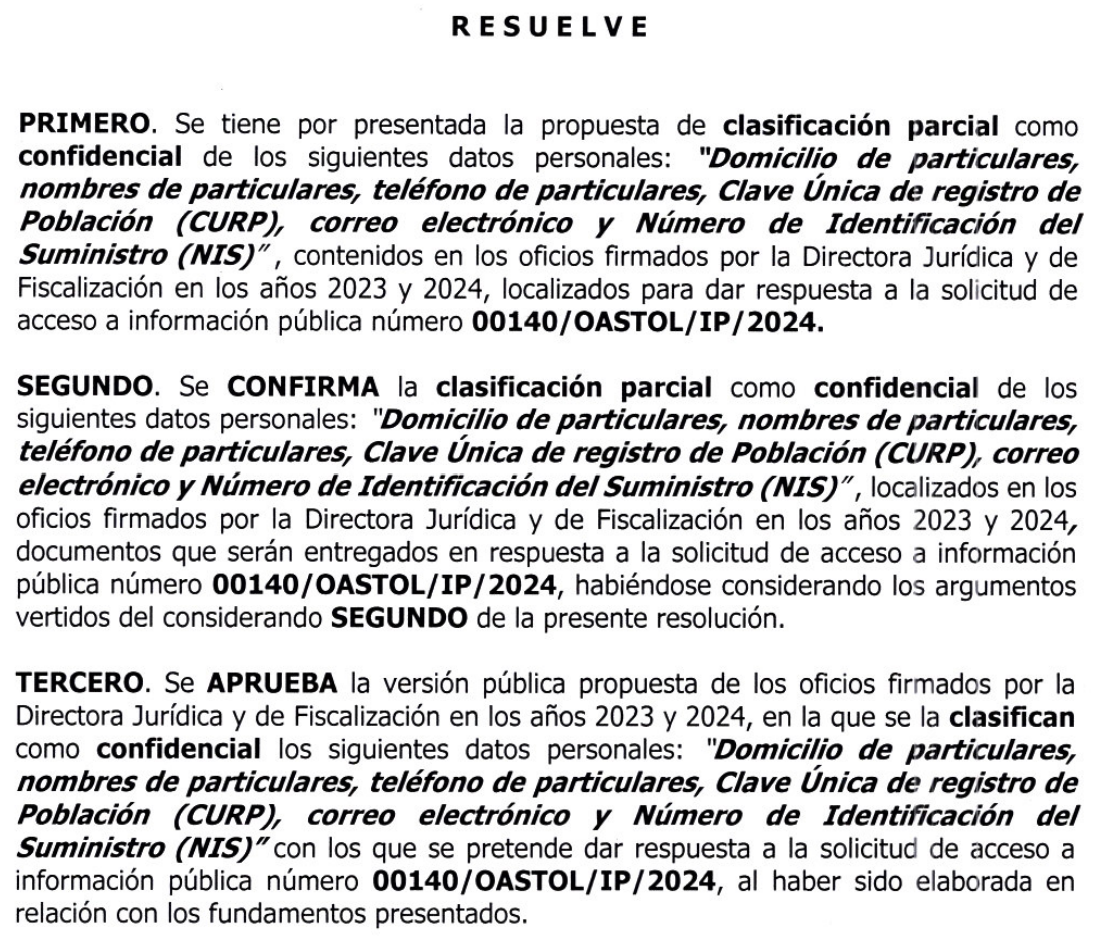
Ahora bien, la Directora Jurídica y de Fiscalización preciso que proporcionaba los oficios firmados del veintiocho de junio de dos mil veintitrés al once de septiembre de dos mil veinticuatro; sin embargo, de la revisión de las constancias que obran en el expediente, se logra vislumbrar que omitió anexarlos.

Es decir, si bien indicó que entrega los documentos solicitados, no los adjuntó lo cual da como resultado que el agravio sea **FUNDADO,** por lo que, para atender la solicitud de información, deberá realizar una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos de la Dirección Jurídica y de Fiscalización, a efecto de que proporcione los oficios referidos anteriormente, con el fin de dar cumplimiento a los artículos 12, 160 y 162 de la Ley de la materia.

Ahora bien, para el caso de que haya cancelado alguno de los oficios, deberá hacerlo del conocimiento, en términos del artículo 19, párrafo segundo, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Así mismo, no pasa desapercibido para este Instituto, que el Sujeto Obligado refirió en respuesta que clasificó como confidencial, diversa información contenida en los oficios previamente referidos, mediante la Resolución del Comité de Transparencia número RES/05/OAYST/CT/SO/3a/2024, tal como se muestra en el siguiente extracto:





Así, se procede analizar si dichos datos son confidenciales o públicos; en principio, cabe mencionar que el artículo 143, fracción I, de la Ley previamente citada, establece que la información privada y los datos personales, concernientes a una persona física o jurídica colectiva identificada o identificable son confidenciales.

Asimismo, el artículo 145 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, prevé que para que los Sujetos Obligados puedan permitir el acceso a la información confidencial, requieren obtener el consentimiento de los particulares titulares de la información, excepto cuando i) la información se encuentre en registros públicos o fuentes de acceso público, ii) por ley tenga el carácter de pública, iii) exista una orden judicial, iv) por razones de seguridad nacional y salubridad general o v) para proteger los derechos de terceros o cuando se transmita entre sujetos obligados en términos de los tratados y los acuerdos interinstitucionales.

En términos de lo expuesto, la documentación y aquellos datos que se consideren confidenciales, serán una limitante del derecho de acceso a la información, siempre y cuando:

1. Se trate de datos personales o información privada; esto es, información concerniente a una persona física o jurídico colectiva y que esta sea identificada o identificable.
2. Para la difusión de los datos, se requiera el consentimiento del titular.

Bajo ese contexto, se analizarán si los datos mencionados, deben ser considerados confidenciales, en términos del artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, o públicos tal como se expone a continuación:

* **Domicilio particular.**

De acuerdo a lo señalado en los artículos 2.3 y 2.5 del Código Civil del Estado de México, el domicilio es un atributo de la personalidad y un derecho de las personas; además que tiene como propósito que una persona pueda establecerse temporal o permanentemente en un lugar determinado, para habitar, establecer su centro de trabajo o negocios.

De la misma manera, lo establece el artículo 29 del Código Civil Federal, al precisar que el domicilio de personas físicas**, es el lugar donde residen habitualmente, el lugar del centro principal de sus negocios, donde residan o el lugar donde se encuentren.**

En ese contexto, la dirección o domicilio es el lugar en donde reside habitualmente una persona física, por lo que, permite hacerlo identificable y ubicable, propiciando que pueda ser molestado en su casa o negocio, de este modo, los datos que permiten a cualquier individuo con esfuerzos mínimos identificar el lugar de residencia o de trabajo constituye un dato personal y, por ende, confidencial, ya que incide directamente en la privacidad de personas físicas identificadas y su difusión podría afectar la esfera privada de las mismas.

Por lo tanto, se actualiza la clasificación del domicilio, de conformidad con la fracción I, del artículo 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Nombre de particulares**

Al respecto, se considera que el nombre se integra con el sustantivo propio y el primer apellido de los padres, en el orden que, de común acuerdo determinen; asimismo es la manifestación principal del derecho subjetivo a la personalidad y atributo de esta en términos del artículo 2.3 del Código Civil del Estado de México, de tal suerte, el nombre *per se* es un elemento que hace a una persona física identificada o identificable, por lo que, **se considera un dato personal.**

Al respecto cabe señalar lo previsto en la tesis aislada número 1a. CCXIV/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXX, de diciembre de 2009, página 277, de la Novena Época, materia constitucional, que establece lo siguiente:

*“****DERECHO A LA VIDA PRIVADA. SU CONTENIDO GENERAL Y LA IMPORTANCIA DE NO DESCONTEXTUALIZAR LAS REFERENCIAS A LA MISMA.*** *La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha referido en varias tesis a los rasgos característicos de la noción de lo ‘privado’. Así, lo ha relacionado con: lo que no constituye vida pública; el ámbito reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás; lo que se desea compartir únicamente con aquellos que uno elige; las actividades de las personas en la esfera particular, relacionadas con el hogar y la familia; o aquello que las personas no desempeñan con el carácter de servidores públicos. Por otro lado, el derecho a la vida privada (o intimidad) está reconocido y protegido en declaraciones y tratados de derechos humanos que forman parte del orden jurídico mexicano, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11) y la Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 16). Al interpretar estas disposiciones, los organismos internacionales han destacado que la noción de vida privada atañe a la esfera de la vida en la que las personas pueden expresar libremente su identidad, ya sea en sus relaciones con los demás o en lo individual, y han destacado su vinculación con un amplio abanico de otros derechos, como la inviolabilidad de la correspondencia y de las comunicaciones en general, la inviolabilidad del domicilio, las garantías respecto de los registros personales y corporales, las relacionadas con la recopilación y registro de información personal en bancos de datos y otros dispositivos; el derecho a una vivienda adecuada, a la salud y a la igualdad; los derechos reproductivos, o la protección en caso de desalojos forzados. Las afirmaciones contenidas en las resoluciones nacionales e internacionales son útiles en la medida en que no se tomen de manera descontextualizada, emerjan de un análisis cuidadoso de los diferentes escenarios jurídicos en los que la idea de privacidad entra en juego y no se pretenda derivar de ellas un concepto mecánico de vida privada, de referentes fijos e inmutables. Lo único que estas resoluciones permiten reconstruir, en términos abstractos, es la imagen general que evoca la idea de privacidad en nuestro contexto cultural.* ***Según esta noción, las personas tienen derecho a gozar de un ámbito de proyección de su existencia que quede reservado de la invasión y la mirada de los demás, que les concierna sólo a ellos y les provea de condiciones adecuadas para el despliegue de su individualidad -para el desarrollo de su autonomía y su libertad-.*** *A un nivel más concreto, la misma idea puede describirse apelando al derecho de las personas a mantener fuera del conocimiento de los demás (o, a veces, dentro del círculo de sus personas más próximas) ciertas manifestaciones o dimensiones de su existencia (conducta, datos, información, objetos) y al correspondiente derecho a que los demás no las invadan sin su consentimiento.* ***En un sentido amplio, entonces, la protección constitucional de la vida privada implica poder conducir parte de la vida de uno protegido de la mirada y las injerencias de los demás****, y guarda conexiones de variado tipo con pretensiones más concretas que los textos constitucionales actuales reconocen a veces como derechos conexos: el derecho de poder tomar libremente ciertas decisiones atinentes al propio plan de vida, el derecho a ver protegidas ciertas manifestaciones de integridad física y moral, el derecho al honor o reputación, el derecho a no ser presentado bajo una falsa apariencia, el derecho a impedir la divulgación de ciertos hechos o la publicación no autorizada de cierto tipo de fotografías, la protección contra el espionaje, la protección contra el uso abusivo de las comunicaciones privadas, o la protección contra la divulgación de informaciones comunicadas o recibidas confidencialmente por un particular.”*

De conformidad con lo señalado, se colige que **las actividades que realicen los particulares, dentro del ámbito privado, o dentro de la esfera particular, es información que debe protegerse.**

En consecuencia, se estima que resulta procedente la clasificación del nombre de particulares en actuación dentro de su ámbito privado, en términos del artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Correo electrónico particular**

El correo electrónico es un sistema de transmisión de mensajes por computadora a través de redes informáticas. Dicho dato se puede asimilar al teléfono o domicilio particular, cuya nomenclatura, se considera como un dato personal, toda vez que es un medio para comunicarse con la persona titular del mismo, la hace localizable e incluso identificable, al poder estar conformado por parte de su nombre o bien, fecha de nacimiento.

En ese sentido, cabe señalar que el correo electrónico que corresponda a una persona física y no así en calidad de trabajador del Gobierno, como servidor público; por lo que corresponde a un dato personal que actualiza la causal de clasificación establecida en el artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Teléfono particular**

Al igual que el correo electrónico, el número asignado a un teléfono particular o celular permite localizar a una persona física identificada o identificable, ya sea a través de un dispositivo móvil o bien, en un lugar como el domicilio; por lo que, dicho dato personal es susceptible de ser clasificado como confidencial, con fundamento en el artículo 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

* **Clave Única de Registro de Población (CURP).**

El artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone la obligación de los ciudadanos de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos; además, el diverso 85 de la Ley General de Población, prevé que corresponde a la Secretaría de Gobernación el registro y acreditación de la identidad de todas las personas residentes en el país y de los nacionales que residan en el extranjero.

Acorde con lo anterior, el artículo 22 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, establece en su fracción III, que la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal tiene la atribución de asignar y depurar la Clave Única de Registro de Población a todas las personas residentes en el país, así como a los mexicanos que residan en el extranjero.

En ese orden de ideas, la Secretaría de Gobernación en las direcciones <https://consultas.curp.gob.mx/CurpSP/html/informacionecurpPS.html> y <https://www.gob.mx/segob/renapo/acciones-y-programas/clave-unica-de-registro-de-poblacion-curp-142226> (consultadas el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés), estableció que la Clave Única del Registro de Población, es un instrumento de registro que se asigna a todas las personas que viven en el territorio nacional, así como a los mexicanos que residen en el extranjero y se compone de dieciocho elementos, representados por letras y números, que **se generan a partir de los datos contenidos en el documento probatorio de la identidad** **del interesado** (acta de nacimiento, carta de naturalización o documento migratorio) de la siguiente forma:

* El primero y segundo apellidos, así como al nombre de pila;
* La fecha de nacimiento;
* El sexo, y
* La entidad federativa de nacimiento.

Los dos últimos elementos de la Clave Única de Registro de Población evitan la duplicidad de la Clave y garantizan su correcta integración.

Como se desprende de lo anterior, la Clave Única de Registro de Población es un dato personal confidencial, ya que por sí sola brinda información personal de su titular y lo hace identificado e identificable, motivo por el cual se aprueba su eliminación de las versiones públicas, ya que además no guarda relación con el desempeño laboral de un individuo, simplemente se trata de un trámite administrativo requerido por la autoridad federal para hacer identificables a las personas.

Situación que se robustece, con el Criterio de Interpretación, de la Segunda Época, con número de registro SO/018/2017, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que establece lo siguiente:

***“Clave Única de Registro de Población (CURP).*** *La Clave Única de Registro de Población se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular de la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información que distingue plenamente a una persona física del resto de los habitantes del país, por lo que la CURP está considerada como información confidencial.”*

De acuerdo con lo anterior, resulta procedente la clasificación de **la Clave Única de Registro de Población**, por tratarse de un dato personal confidencial, en términos del artículo 143, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

* **Número de Identificación de Suministro.**

Ahora bien, por lo que hace al dato en cuestión, este corresponde a un medio de identificación dentro del Sujeto Obligado, por lo que, solo le atañe al Organismo de Agua y el usuario dicha información, al ser datos meramente administrativos y personales; además, que pudieran hacer identificables un predio particular o a una persona, con la vinculación de otros datos.

De tales circunstancias, se considera que el dato en comento, es información confidencial lo cual atañe únicamente a los usuarios y al Organismo Público Descentralizado, por lo que, son clasificados en términos del artículo 143, fracción I de la Ley de la materia.

Conforme a lo anterior, se logra vislumbrar que los datos clasificados en los oficios firmados por la Directora Jurídica y de Fiscalización del veintiocho de junio de dos mil veintitrés al once de septiembre de dos mil veinticuatro corresponden a datos personales confidenciales, que actualizan la causal de clasificación establecida en el artículo previamente referido, por lo que, se considera que el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca protegió de manera adecuada dicha información.

Ahora bien, se procede analizar el Acuerdo número TLA/UT/ACT/EXT/02/2022; , según Bonifaz, Leticia (2016), en la “Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Comentada” (p. 342), la **clasificación de la información**, ocurre cuando la autoridad niega el acceso a esta, por ser confidencial o reservada, para lo cual, los sujetos obligados, deberán realizar el proceso de clasificación, a la luz de los principios y disposiciones establecidas en las Leyes de Transparencia, fundando y motivando, **de manera adecuada la negativa de información.**

Además, conforme al artículo 108, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el 134 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios y el Sexto de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas –Lineamientos Generales-, los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general que clasifiquen documentos o expedientes; por lo que, la clasificación de información se llevará a cabo mediante un **análisis caso por caso.**

Sobre lo anterior, el artículo 131 de la Ley referida, así como el Quinto de los Lineamientos Generales, establecen que los sujetos obligados **deberán fundar y motivar** debidamente la clasificación de la información.

Al respecto, el Octavo de los Lineamientos Generales, precisa lo siguiente:

* **Para fundar la clasificación** de la información se deberán señalar el artículo, fracción, inciso, párrafo o numeral de la Ley aplicable;
* **Para motivar la clasificación** se deberán indicar las razones y circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada; la cual, en el caso de que se trate de información reservada, la motivación, deberá comprender las circunstancias que justifican el establecimiento de un determinado plazo de reserva.

Lo anterior, toma sustento en la fracción VII, del artículo 1.8, del Código Administrativo del Estado de México, que establece que todo acto administrativo, debe estar fundado y motivado, esto es, que contenga con precisión, los preceptos legales aplicables, las circunstancias generales o especiales, razones particulares y causas que se hayan tomado en cuenta para la emisión del mismo; asimismo, se trae cita por analogía la Tesis aislada número I. 4o. P. 56 P, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, (p. 450), que establece lo siguiente:

***“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, CONCEPTO DE.*** *La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, establece que todo acto de autoridad precisa encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero la obligación de la autoridad que lo emite, para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada; y por lo segundo, que exprese una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre el por qué consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa.”*

Conforme a lo anterior, se advierte lo siguiente:

* **Fundamentación:** Obligación de la autoridad que emite un acto, para citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye para la determinación tomada.
* **Motivación:** Razonamientos lógico-jurídicos sobre porque se consideró en el caso en concreto, que se ajusta a la hipótesis normativa.

Situación que toma relevancia, pues conforme al artículo 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, todo acuerdo que clasifique la información como confidencial, deberá contener un razonamiento lógico en el que se demuestre que la información actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 143 del ordenamiento jurídico establecido.

En ese contexto, de la revisión el Acta del Comité de Transparencia entregado por el Sujeto Obligado, se logra colegir que precisó de manera fundada y motivada las razones por las cuales los datos previamente referidos eran clasificados; por lo que, en el presente caso, para dar por atendido el requerimiento de información, deberá proporcionar la versión pública de los oficios firmados por la Directora Jurídica y de Fiscalización del veintiocho de junio de dos mil veintitrés al once de septiembre de dos mil veinticuatro.

**SEXTO. Decisión**

Con fundamento en el artículo 186, fracción I y III, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este Instituto considera procedente resolver conforme a lo siguiente:

* **SOBRESEER** el Recurso de Revisión 06547/INFOEM/IP/RR/2024, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción IV, del diverso 192, en relación, con el 191, fracción III, ambos del citado ordenamiento legal.
* **MODIFICAR** la respuesta otorgada por el Sujeto Obligado a la solicitud de información 00140/OASTOL/IP/2024, por resultar **FUNDADAS** las razones o motivos de inconformidad hechos valer por el Recurrente, a efecto de que previa búsqueda exhaustiva y razonable en sus áreas competentes, entregue, en versión pública, los oficios firmados por la Directora Jurídica y de Fiscalización del veintiocho de junio de dos mil veintitrés al once de septiembre de dos mil veinticuatro.

Para el caso de que, en alguno de los días peticionados, no se hayan generado o recibido oficios, o bien, hayan sido inhábiles para las dependencias señaladas, deberá hacerlo del conocimiento del Recurrente, de manera clara y precisa.

**Términos de la Resolución para conocimiento del Particular**

Se le hace del conocimiento al ahora Recurrente, que, en el caso de la solicitud de información 00139/OASTOL/IP/2024 y recurso de revisión 06547/INFOEM/IP/RR/2024 no actualizó ninguna de las causales de procedencia, establecidas en la Ley de la materia, toda vez que al interponer su Recurso de Revisión, el mismo no se advirtió alguna razón o motivo de inconformidad; por lo que, resulta procedente sobreseer el Medio de Impugnación, al ser improcedente. Así mismo por lo que respecta en respuesta a la solicitud de información 00140/OASTOL/IP/2024 el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca, se le concede la razón, pues el Ente Recurrido omitió entregar la información solicitada.

Finalmente, se la informa, que la labor del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es apoyar a la población a acceder a la información pública y garantizar la protección de los datos personales.

Por lo expuesto y fundado, este Pleno:

**R E S U E L V E:**

**PRIMERO.** Se **SOBRESEE** el Recurso de Revisión 06547/INFOEM/IP/RR/2024, por actualizarse la causal de improcedencia establecida en la fracción III, del artículo 191, en relación con el artículo 192, facción IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de conformidad con lo señalado en el Considerando SEGUNDO y SEXTO de la presente Resolución.

**SEGUNDO.** Se **MODIFICA** la respuesta entregada por el Organismo Agua y Saneamiento de Toluca a la solicitud de información 00140/OASTOL/IP/2024, por resultar **FUNDADO** los motivos o razones de inconformidad hechos valer por el Particular, en términos de los considerandos QUINTO y SEXTO de la presente Resolución.

Se **ORDENA** al Ente Recurrido, a efecto de que, previa búsqueda exhaustiva y razonable, en todas las áreas competentes, entregue, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (SAIMEX), en versión pública los oficios firmados por la Directora Jurídica y de Fiscalización del veintiocho de junio de dos mil veintitrés al once de septiembre de dos mil veinticuatro.

Para el caso, de que haya cancelado alguno de los oficios, deberá hacerlo del conocimiento del Recurrente, de manera clara y precisa.

**TERCERO. NOTIFÍQUESE POR SAIMEX** la presente resolución al Titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado, para que conforme al artículo 186, último párrafo, 189, segundo párrafo, y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III, 214, 215 y 216 de la Ley referida.

De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el Sujeto Obligado de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente Resolución.

**CUARTO. NOTIFÍQUESE POR SAIMEX** al Recurrente la presente Resolución, asimismo, se hace de su conocimiento que de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios podrá promover el Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE, POR **UNANIMIDAD** DE VOTOS EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA, EN LA TRIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA, CELEBRADA EL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO, ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.